

Santiago, siete de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto:

En estos autos RIT S-6-2019, RUC 1940238523-8, del Juzgado de Letras del Trabajo de Arica, por sentencia de dos de marzo de dos mil veinte, se rechazó la denuncia por práctica antisindical deducida por la Inspección Provincial del Trabajo en contra de la empresa “Fundación Educacional Juan Pablo II”.

Con la finalidad de invalidar esta decisión, la denunciante presentó recurso de nulidad que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Arica, mediante sentencia de veintisiete de abril de dos mil veinte, declarando, en la de reemplazo, que la denunciada incurrió en prácticas antisindicales, ordenando su inmediato cese y la reincorporación de los trabajadores despedidos, condenándola, además, al pago de una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales.

En contra de este fallo, la denunciada dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, en el que solicita su invalidación y se dicte el de reemplazo que indica.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de los Tribunales Superiores de Justicia. La presentación debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las divergencias jurisprudenciales y acompañar copia del o de los fallos que se invocan como criterios de referencia.

Segundo: Que, conforme se expresa en el recurso, la materia de derecho propuesta consiste en *“fijar el real sentido y alcance de lo dispuesto en el artículo 221 inciso tercero y artículo 289 del Código del Trabajo, en el sentido de determinar si existe o no obligación por parte de los trabajadores constituyentes del sindicato, de informar previamente de este proceso a efectos que esta sea oponible u obligue al empleador a respetar el fuero especial retroactivo de 10 días anteriores a la constitución del mismo”*.

Para la recurrente, la conducta sancionada en el artículo 289 letra f) del Código del ramo, en relación con su artículo 221, requiere que el empleador conozca el fuero que ampara a los trabajadores despedidos, en particular, que se trate de dirigentes electos de un sindicato y, además, debe concurrir en aquél una



intención de lesionar la libertad sindical, tal como se decidió en los fallos de contraste que acompaña, precisando que, en este caso, no se comunicó oportunamente su constitución y la elección en la directiva de los tres docentes, por lo que considera inoponible el fuero retroactivo, defecto que impide considerar que su desvinculación adolece de ilegalidad, puesto que actuó de buena fe; razones por las que solicita la invalidación del fallo recurrido y se dicte el de reemplazo en unificación de jurisprudencia que indica.

Tercero: Que para efectuar el ejercicio de contraste propio del recurso que se analiza, se debe constatar la similitud de la materia de derecho resuelta en el fallo impugnado y en el que se ofrece para su confrontación, semejanza que es además necesaria cuando se comparan las circunstancias de contexto que motivaron la sentencia que se reprueba, con aquellas que justificaron la orientación jurisprudencial disidente.

En efecto, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se sostengan concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una discrepancia que deba ser resuelta y uniformada por esta Corte.

De este modo, para que prospere un arbitrio como el de la especie, y como cuestión previa, es menester verificar si los hechos establecidos en el pronunciamiento impugnado y sus razonamientos de derecho, son susceptibles de ser comparados con aquellos que sirven de fundamento a la sentencia que se invoca para su contraste, puesto que sólo sobre la base de dicha identidad o semejanza, será posible homologar decisiones contradictorias.

Cuarto: Que, según lo expuesto, para la acertada resolución del asunto traído a conocimiento de esta Corte, se deben considerar, en primer lugar, los hechos establecidos en la instancia:

1.- Los tres docentes, dependientes de la empresa denunciada, fueron elegidos el 29 de noviembre de 2019, respectivamente, como presidente, tesorero y secretaria del “sindicato número 1 de trabajadores de la fundación Juan Pablo II”, organización formalmente constituida ese día, hecho que fue comunicado por escrito al empleador, el 2 de diciembre siguiente.

2.- El 26 de noviembre de 2019, los tres docentes fueron despedidos por necesidades de la empresa.



3.- Previo requerimiento de la Inspección Provincial, la denunciada se negó en dos oportunidades a reintegrar a los trabajadores separados de sus funciones.

Sobre la base de los hechos establecidos, la judicatura del fondo tuvo presente para resolver lo dispuesto en el artículo 221 del Código del Trabajo, puesto que se trata de una norma que ampara a los afectados, otorgándoles fuero desde los diez días anteriores al de celebración de la respectiva asamblea, vigente, en consecuencia, a contar del 19 de noviembre de 2019, concluyendo que la sola negativa de la denunciada a reincorporarlos, en tales circunstancias, constituye una práctica que afecta a la libertad sindical, por lo que toda exigencia adicional relacionada con el desconocimiento de la denunciada o su inoponibilidad por haber actuado de buena fe, no se relaciona con la práctica que motivó la demanda, porque no configuran los requisitos contenidos en la normativa aplicable, razones por las que estimó procedente la imputación efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo.

Quinto: Que, para efectos de contraste, la denunciada ofreció dos fallos pronunciados por la Corte de Apelaciones de Santiago y por esta Corte Suprema, en los autos Rol N°15-2010 y 829-2011, de 12 de abril de 2010 y 22 de diciembre de 2011, respectivamente.

En el primero, se decidió que, *“para concluir que una conducta es constitutiva de práctica antisindical, no basta la simple verificación de un hecho aparentemente lesivo a ese derecho fundamental, sino que es necesario asentar además que tal acto está determinado por ese propósito de afectación de la libertad sindical, elemento que, cuando menos debe ser susceptible de inferir de otros antecedentes del proceso”*, agregando, a continuación, que *“los hechos asentados en el fallo que se revisa, dan cuenta de una conducta aislada y concreta, cual es, el despido de un trabajador aforado por la causal de necesidades de la empresa y, como consecuencia de ello, la negativa del empleador a reincorporarlo, decisión que mantuvo aun cuando tomó conocimiento de la constitución del sindicato y del fuero que lo amparaba. Sin embargo, tales actos por sí solos no constituyen indicios suficientes para afirmar que el empleador tuvo el propósito de afectar directa o indirectamente la libertad sindical. La conclusión anterior se refuerza aún más si se tiene presente que el empleador desvinculó al trabajador antes de la fecha en que se realizó la asamblea constitutiva y, por tanto, en total ignorancia de su calidad de aforado, por lo que no es posible inferir que ese despido tuvo la connotación atribuida. En efecto, no se*



probó en autos que tal decisión haya tenido por objeto perjudicar la formación o funcionamiento del sindicato o que tal exoneración haya causado en los demás trabajadores un impacto de tal entidad como para afectar la libertad sindical, elementos que de existir, ciertamente permitirían, sobre la base de los indicios, deducir la intencionalidad aludida, lo que no consta de autos”, razones por las que concluyó, que “la conducta que se reprocha al empleador no reúne las características de un acto de tal naturaleza, pues no se advierte en la especie la existencia de hechos demostrativos de una actitud nociva al interés sindical o que haya tenido por objeto desprestigiar a la directiva y su actuar”.

En el segundo fallo, se consideró para resolver, que *“a través de este arbitrio el legislador radica en esta Corte la actividad de aunar las diversas interpretaciones que se relacionen por el recurrente sobre una misma materia de derecho, es decir, sustantiva o de fondo y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre”,* sin embargo, *“no se advierte contradicción alguna en la línea jurisprudencial seguida en las sentencias que se invocan en el recurso en relación con la que se ha adoptado en el fallo impugnado. En efecto, en unas y otra se establece que la concurrencia de prácticas antisindicales está determinada por la presencia de un elemento subjetivo, cual es, el ánimo específico de provocar un resultado lesivo en el derecho a la actividad sindical, en cualquiera de sus manifestaciones. En consecuencia, en cuanto a la materia en análisis el recurso de unificación intentado debe ser rechazado, en la medida que nada distinto podría resolverse respecto a la recta interpretación del inciso primero del artículo 289 del Código del ramo”.*

Sexto: Que del análisis de los hechos y razonamientos desarrollados en el fallo que se revisa y en los aparejados como de contraste ya referidos, se advierte una particularidad concurrente que impide considerar cumplida la exigencia requerida en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, por cuanto la decisión recurrida se sostiene en la normativa vigente tras la modificación introducida a su texto por la Ley N°20.940, en particular, la nueva letra f) agregada al artículo 289, que comenzó a regir el 1 de abril de 2017, disposición que no existía cuando se dictaron las sentencias del pretendido contraste, advirtiéndose que sólo a partir de esa fecha, se sanciona, como práctica antisindical: *“Negarse a reincorporar en sus funciones a un dirigente sindical aforado, frente al requerimiento de un fiscalizador de la Inspección del Trabajo, salvo que el tribunal respectivo haya decretado la separación provisional del trabajador de conformidad*



a lo establecido en el inciso segundo del artículo 174”; en relación con su artículo 221, inciso tercero, que otorga a *“Los trabajadores que concurran a la constitución de un sindicato de empresa o de establecimiento de empresa gozarán de fuero laboral desde los diez días anteriores a la celebración de la respectiva asamblea constitutiva y hasta treinta días de realizada. Este fuero no podrá exceder de cuarenta días”*; se tiene presente que las decisiones calificadas de divergentes por la recurrente, se sostuvieron en preceptivas diversas y sin similitudes para ser homologadas con la impugnada, ya que en la dictada por la Corte de Apelaciones de esta ciudad, las normas que se denunciaron infringidas según la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, se contienen en sus artículos 214 inciso cuarto y 225, que disponen, respectivamente: *“Un trabajador no puede pertenecer a más de un sindicato, simultáneamente, en función de un mismo empleo. Las organizaciones sindicales no podrán pertenecer a más de una organización de grado superior de un mismo nivel”* y *“El directorio sindical comunicará por escrito a la administración de la empresa, la celebración de la asamblea de constitución y la nómina del directorio y quienes dentro de él gozan de fuero, dentro de los tres días hábiles laborales siguientes al de su celebración”*, agregando sus incisos segundo y tercero que, *“Igualmente, dicha nómina deberá ser comunicada, en la forma y plazo establecido en el inciso anterior, cada vez que se elija el directorio sindical”* y *“En el caso de los sindicatos interempresa, la comunicación a que se refieren los incisos anteriores deberá practicarse a través de carta certificada. Igual comunicación deberá enviarse al empleador cuando se elija al delegado sindical a que se refiere el artículo 229”*; en tanto que el dictamen de esta Corte, resolvió la correcta interpretación del artículo 221, considerado aisladamente, que a esa fecha disponía, sin grandes diferencias al que actualmente rige, que *“Los trabajadores que concurran a la constitución de un sindicato de empresa, de establecimiento de empresa o de un sindicato interempresa, gozan de fuero laboral desde los diez días anteriores a la celebración de la respectiva asamblea constitutiva y hasta treinta días de realizada. Este fuero no podrá exceder de 40 días”*.

Séptimo: Que, de los antecedentes descritos, se colige que las decisiones ofrecidas a modo de cotejo, no pudieron pronunciarse acerca del sentido y alcance del artículo 289 letra f) del Código del Trabajo, norma *decisoria litis* vigente desde el 1 de abril de 2017, que sanciona al empleador que se niega a cumplir el requerimiento efectuado por el inspector del trabajo, de reincorporar al trabajador



aforado, hecho constitutivo de práctica antisindical que fue acreditado en estos autos, puesto que la denunciada, al ser conminada en dos oportunidades, no acató la instrucción del fiscalizador, relacionada con la reincorporación de los docentes despedidos, que tres días más tarde fueron elegidos en la respectiva asamblea, respectivamente, como presidente, tesorero y secretaria, suficiente para entender vulnerada la libertad sindical y transgredido el fuero que al momento de ser despedidos estaba vigente por expreso mandato legal; cuestión diversa a la tratada en los fallos acompañados, contenedores de decisiones que resolvieron la controversia haciendo uso de la normativa vigente a esa época, que no describía en forma expresa, el supuesto que motivó la sanción a la recurrente, razón por la cual se tornan en ineficaces para ser comparadas.

Octavo: Que, por lo anterior, se debe concluir que concurren basamentos suficientes para desestimar el arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la denunciada en contra de la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veinte por la Corte de Apelaciones de Arica.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°62.882-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Jean Pierre Matus A., y los Abogados Integrantes señora María Cristina Gajardo H., y señor Gonzalo Ruz G. No firman los ministros señor Blanco y señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios el primero y por estar con permiso la segunda. Santiago, siete de diciembre de dos mil veintiuno.





En Santiago, a siete de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

